

**AMPARO EN REVISIÓN 835/2018**

**MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES**

**QUEJOSAS: CLEMENTINA MURCIA GONZÁLES Y OTRAS MADRES DE MIGRANTES DESAPARECIDOS EN MÉXICO**

**ASUNTO: Se presenta escrito en calidad de “Amicus Curiae”**

**Ministras y Ministros Integrantes de la Primera Sala  
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
Presente**

**Las organizaciones e instituciones firmantes y adherentes,** respetuosamente comparecemos ante esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de hacer llegar este *amicus curiae*, para lo cual:

## **EXPONEMOS**

### **1. Finalidad del *amicus curiae***

El presente escrito de “Amicus Curiae” tiene por objeto allegar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la relevancia y particularidades del caso sometido a su consideración, identificado supra.

Conforme a la evolución de los derechos de las víctimas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional de los derechos humanos, éstas han trascendido de ser -objetos del proceso- a ser actoras protagónicas en los procesos judiciales, principalmente, dentro del proceso penal.

De forma inédita, la reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 21 de septiembre del 2000, visibiliza por primera vez, de forma expresa los derechos de las víctimas como sujetos activos del proceso, concediéndoles dentro del proceso penal, entre otros, el derecho a “[...] Recibir asesoría jurídica [...]”<sup>1</sup>, adecuando así el marco jurídico nacional a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Esa tendencia se profundizó en las reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 2008<sup>2</sup> y

---

<sup>1</sup> Confrontar: fracción I, apartado B] del artículo 20. «Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos» (2000), [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM\\_ref\\_149\\_21sep00\\_ima.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_149_21sep00_ima.pdf).

<sup>2</sup> Confrontar apartado C] del artículo 20. «Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.» (2008), [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM\\_ref\\_180\\_18jun08\\_ima.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf).

el 14 de julio de 2011<sup>3</sup>, las cuales, han profundizado el desarrollo de los derechos de las víctimas, generando, un equilibrio entre los derechos de las víctimas y de los imputados.

Esa tendencia ha sido acompañada de una reforma integral al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 10 de junio de 2011<sup>4</sup>, la cual ha armonizado el texto constitucional con el derecho internacional (hard law) y el derecho blando (soft law) para garantizar a todas las personas el goce de los derechos humanos, cuyo ejercicio “[...] no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones [...]” establecidas en el texto constitucional.

En ese marco, el *amicus curiae* que se presenta, constituye una institución jurídica mediante la cual se abre la posibilidad a terceros, que no tienen legitimación procesal en un litigio, de promover voluntariamente una opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes al juzgador para el momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de trascendencia social.

El análisis y la consideración de las manifestaciones relativas por los órganos jurisdiccionales se sustenta en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la literal a), numeral 1, del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como, lo establecido en el Acuerdo General Número 2/2008, del 10 de marzo de 2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen los lineamientos para la celebración de audiencias relacionadas con asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional.

Con base en lo expresado se hace una breve relación de los antecedentes, el impacto negativo del proyecto de resolución frente al alcance de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos para tornar operativos los derechos de las víctimas e, incluso, de los imputados...XXX

## **2. Antecedentes del caso**

El 2 de febrero de 2017, Clementina Murcia González, Vilma Argentina Maldonado Herrera, Tomasa Guzmán Flores, Dilma Pilar Escobar Medina, Gloria Mariana Dubón Gómez y Leticia Sofía Martínez Tronchez, todas ellas madres de migrantes hondureños desaparecidos, presentaron amparo en contra de acuerdo del ministerio público adscrito a la Unidad de Migrantes de la Fiscalía General de la República, que negaba su derecho para poder consultar su expediente y ejercer su derecho de acceso a la justicia desde otros países utilizando el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) y por la negativa para que defensores/as de derechos humanos pudieran acompañarlos en diligencias de investigación y revisar el expediente refiriendo el ministerio público que sólo quienes tienen carácter de parte (la víctima, ofendido y su asesor jurídico, entre

---

<sup>3</sup> Confrontar fracción V, apartado C] del artículo 20. «Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos» (2011), [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM\\_ref\\_195\\_14jul11.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_195_14jul11.pdf).

<sup>4</sup> «Decreto por que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos» (2011), [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM\\_ref\\_194\\_10jun11.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf).

otros) pueden llevar a cabo estos actos. El Ministerio Público señala que la consulta de la carpeta de investigación son estrictamente reservados a las partes (víctima, ofendido y asesor jurídico, entre otros).

[illegible]

Esto se acordó en más de 15 carpetas de investigación de víctimas de desaparición que fueron interpuestas desde Centro América a través del Mecanismo de Apoyo Exterior, por lo que las víctimas, con el apoyo de la Fundación para la Justicia, promovieron amparos en contra de todos estos acuerdos ministeriales.

Las quejas alegaron en los amparos que los acuerdos del Ministerio Público, violan el artículo 20 constitucional apartado C fracción II sobre el derecho de la coadyuvancia a la luz de la *Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos*, mejor conocido como Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU. Alegaron también que es una violación a los derechos de las víctimas el impedirles elegir quién desean que las acompañe en la investigación penal y quien puede apoyarlas en la revisión de su expediente. También es una violación a la citada Declaración en el sentido de que todas las personas tienen derecho a defender derechos humanos, sin restricción alguna.

## Resolución del Juzgado de Distrito

El Juez de Distrito **falló a su favor el derecho a consultar el expediente, y ejercer su derecho de acceso a la justicia desde la embajada de Honduras a través del MAE, lo cual se considera un avance importante para garantizar el derecho de madres, esposas, hijas y demás familiares que buscan a sus migrantes desaparecidos desde su país**, utilizando el Mecanismo de Apoyo Exterior. Sin embargo omitió pronunciarse sobre el tema de personas defensoras de derechos humanos, lo

que comprende el derecho de las víctimas a consultar las constancias que obran en las carpetas de investigación por conducto de las y los defensores de derechos humanos que les brindan asesoría. La negativa a permitir la actuación de defensoras y defensores de derechos humanos, viola los derechos de las víctimas.

Se interpuso recurso de revisión por sobre este punto y se solicitó a la SCJN que atrajera el amparo ya referido.

### 3. Caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte atrajo el caso (SEFA 531/2017 elaborada por el Ministro Arturo Zaldivar) y el proyecto fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales. El proyecto fue publicado según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Amparo y desestima lo alegado en la demanda de amparo promovida por las quejas señalando principalmente lo siguiente:

(56) Por cuanto hace a los registros de la investigación, **el ordenamiento en cita establece que éstos, así como los documentos, objetos y demás cosas relacionados con ellos tienen el carácter de reservados**, por lo que sólo las partes podrán acceder a estos, y tratándose de la víctima, tanto ésta como su asesor podrán consultarlos en cualquier momento.

(74) Conforme a esta lógica, la decisión de que los activistas o defensores de los derechos humanos de las víctimas que los acompañan durante el procedimiento no tengan reconocida la posibilidad de acceder a los registros que obran en la carpeta de investigación no afecta ni compromete, en modo alguno, los derechos de información, asesoría y coadyuvancia que se estiman vulnerados en el caso concreto -Resaltado y subrayado no es del original-.

(75) Esto es así, primero, porque como se señala en el propio escrito inicial, la intención de estos profesionales de la defensa de los derechos humanos de las víctimas es participar y acompañarlas a lo largo del proceso, además de asesorarlas en la defensa de sus derechos, pero no son sus representantes y, por tanto, no pueden intervenir directamente dentro del procedimiento respectivo, máxime cuando, como se cita en el escrito inicial, para llevar a cabo estas tareas no se requiere tener una profesión específica como, en cambio, sí lo exige la ley para desempeñar la función de asesor jurídico.

(76) Además, porque **se considera que impedirles acceder directamente a los registros de las carpetas de investigación no merma, en forma alguna, las labores que llevan a cabo**, en tanto que podrán obtener la información que persiguen, en el momento en que la requieran, por conducto de las personas que tienen expedito su derecho para realizar la conducta correspondiente, esto es, para consultar el material que obra en las carpetas de investigación respectivas y, de esta forma, cumplir las labores de asesoría que prestan - Resaltado y subrayado no es del original--.

(77) Finalmente, y en relación con lo recién precisado, **porque pese a la limitación cuestionada, las víctimas siempre tendrán la posibilidad de acceder, en cualquier momento**, a toda la información y asesoría que estimen necesaria para defender sus derechos, así como a coadyuvar con el Ministerio Público, y podrán hacerlo de manera

directa o a través de sus asesores jurídicos, entre los que se encuentran los defensores de derechos humanos, con todo y la limitación que ahora se combate.

**4. Sobre las limitaciones y violaciones que implica que sólo abogados puedan revisar expedientes y acompañar a las víctimas durante la investigación penal.**

a) **Esta resolución pone en grave peligro el derecho de los defensores a defender derechos humanos y acompañar a las víctimas en el proceso penal.**

El trabajo de defensa que realizan las y los defensores de derechos humanos, así como otras personas que sin ser abogados/as acompañan a las víctimas, es siempre en beneficio de la víctima y elegir quién la acompaña y quién puede revisar su expediente es un derecho de la víctima que no puede ser limitado por el Estado.

b) **El proyecto extrapola la definición de partes en el proceso para de ahí derivar, de manera inadecuada y bajo una premisa diferente, que que sólomente quienes tienen este carácter pueden revisar un expediente penal y acompañar a las víctimas.**

Las organizaciones que defienden derechos humanos, cuentan con equipos multidisciplinarios de defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas en todo el camino de la defensa de sus derechos; la investigación penal es parte de este camino de defensa y ha sido con base el carácter “integral” que se desprende del marco jurídico nacional e internacional que las organizaciones han conformado equipos interdisciplinarios integrados por diversas especialidades, e, incluso por otras víctimas, para acompañar y asistir a las víctimas a en el examen del expediente, o bien, para la práctica de alguna diligencia, sin que por ello se supla la necesidad de que se cuente con asesores jurídicos letrados -abogadas o abogados-.

En ese marco, también **los despachos de abogados actúan de la misma manera**: los pasantes son **quienes revisan expedientes penales** y quienes apoyan a los titulares para el seguimiento de caso, para optimizar el ejercicio profesional tanto en defensa de intereses de las víctimas, como de los probables responsables, motivo por el cual, la restricción en la interpretación de los alcances de los derechos de la víctima proyectados en la resolución afectaría no solamente a quienes defienden derechos humanos; sino también, al ejercicio profesional en desmedro de una defensa eficiente que garantice el pleno acceso a la justicia en procuración de una tutela judicial efectiva para los derechos de las víctimas y los imputados.

A la víctima, en ese sentido, en atención a lo previsto por la fracción I, apartado C) del artículo 20 Constitucional le asiste el derecho de nombrar **a cualquier persona para que revise el expediente y le acompañe en las diligencias**, en atención a que la citada norma constitucional dispone como derecho el “[...] **Recibir asesoría jurídica [...]**”, sin limitación alguna, y, sin que por ello, se sustituya la representación de la asesoría legal por una persona profesional y habilitada para ejercerla técnicamente como dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El amparo no se discute que la representación legal está en manos de abogadas y abogados, **lo que se discute es que no se permita que personas que no son abogados revisen el expediente y realicen actos de acompañamiento**, tanto a la víctima como a los profesionales habilitados para

que ejerzan, respectivamente la defensa material y técnica eficiente, limitando así, el ejercicio de una defensa y asesoría técnica para víctimas y posibles responsables.

En atención al ejercicio de esos derechos, se está solicitando en el amparo, que con base en los derechos que la constitución otorga a las víctimas se permita que las personas, designadas por ellas, les apoyen y asistan para tornar operativo el derecho a “[...] **Recibir asesoría jurídica [...]**” integral, sin que por ello, ejerzan una defensa técnica como abogadas o abogados, sino que actúen como coadyuvantes para hacer efectivos los derechos; y, en ese marco, les acompañen cuando ellas consideren necesario; así como, **delegar en las personas defensoras de derechos humanos de su confianza, la revisión del expediente y efectuar actos de acompañamiento**, que como se ha reiterado no sufre ni invade la esfera del defensor técnico habilitado para intervenir como abogada o abogado.

Ha sido, conforme al marco jurídico nacional e internacional, una tradición en nuestro sistema procesal penal, que las partes autoricen a otras personas para revisar el expediente y llevar a cabo funciones de acompañamiento y que las y los abogados se auxilen con un equipo -que no son abogados o abogados- para poder llevar a cabo una defensa integral como lo dispone el marco jurídico nacional e internacional del cual México es parte.

**c) Limitar a que sólo abogados puedan revisar el expediente, deja fuera a otros intervinientes y auxiliares.**

Una víctima puede pedir a algún experto en alguna ciencia o en algún tema específico que mire el expediente para que le de una opinión para poder contar con una mejor defensa. Si la SCJN limita a que sólo quien es parte puede revisar el expediente, nadie más que quien estrictamente tiene ese carácter lo podrá hacer. Literalmente, bajo la interpretación que maneja el proyecto del ministro Luis María Aguilar, se dejaría fuera a otros sujetos del procedimiento penal establecidos en el artículo 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a los auxiliares de las partes. Esto haría inoperante el sistema de procuración y administración de justicia y por lo tanto el derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.

**d) Si se considera que sólo abogados pueden acompañar a los migrantes que son víctimas en el tránsito, genera una relación de discriminación y de exclusión del derecho a la defensa**

Históricamente personas que trabajan en albergues, comunidades religiosas y como defensores y defensoras de personas migrantes, ante la ausencia del Estado de poder dotar de abogados a las personas migrantes, son quienes les han acompañado jurídicamente y asesorado en el proceso penal a víctimas migrantes en el tránsito. El señalar que sólo podrá realizar esta labor quien sea abogado, discrimina a las poblaciones más afectadas y deja sin opciones de defensa a las personas migrantes que ya enfrentan grandes retos para acceder a la justicia en nuestro país.

**e) Las víctimas por si mismas han formado actualmente colectivos para la defensa de sus derechos.**

Obligar que sólo sean abogados quienes acompañan a otras víctimas, excluiría a quienes cuentan con enorme experiencia en el acompañamiento a víctimas. La relación de acompañamiento es una relación de confianza y el Estado no puede imponerle a una víctima la persona en la que debe confiar y esto no excluye que cuente con la representación legal adecuada.

f) **El hecho de que defensoras, defensores, activistas y otras personas puedan acompañar a las víctimas durante el proceso penal y puedan revisar la carpeta de investigación, no contraviene los fines del proceso.**

La pregunta esencial es ¿a quién afectaría si la víctima o incluso el imputado, autorizan a alguien más que a su abogado para que le revise el expediente y le acompañe en las diligencias? No se afecta el equilibrio del proceso, no se afectan los derechos del imputado y no se afecta el derecho a la verdad, la justicia y a la reparación. El Estado tiene la obligación que quitar todos aquellos obstáculos que impiden a la víctima acceder a la justicia. Formalizar en exceso y aumentar los requisitos para acceder a la justicia harán que ésta sea inalcanzable sobre todo para víctimas que cuentan con escasos recursos y que no tienen dinero para pagar un abogado de confianza.

g) **El Estado no tiene la capacidad para dotar a todas las víctimas de este país de un abogado que revise su expediente.**

Este país tiene al menos 43,000 personas desaparecidas. Cada una de estas familias tendría derecho a un abogado victimal que de acuerdo a los criterios que está a punto de establecer esta Corte, son los únicos que podrían revisar su expediente. Actualmente la Asesoría Federal cuenta con 152 asesores federales a nivel nacional y de acuerdo a su último informe, a marzo de 2019 cuenta con un total de 15,927 expedientes. A nivel nacional, cada asesor jurídico representa en promedio 105 casos. ¿Se podría considerar esto como una defensa adecuada? La Suprema Corte no puede poner límites y obstáculos en la defensa de las víctimas que ni el propio Estado podrá superar por la falta de recursos humanos. Pero aunque el Estado tuviera los recursos, no puede limitar el derecho de la víctima a tener a su lado personas de su confianza.

h) El proyecto no entra al estudio integral de la normatividad que obliga al Estado Mexicano para realizar el análisis del artículo 20 constitucional apartado C, misma que fue referida en el escrito de demanda, tal como la *Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos*, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 1, 2, 8 y 25), entre otros. Limita su argumentación alrededor de legislación interna, lo cual restringe los alcances del artículo 1º Constitucional y es regresivo respecto de otras resoluciones donde se utiliza el derecho internacional de los derechos humanos para resolver lo que más beneficie a las víctimas.

i) En el caso de personas desaparecidas, son especialmente relevantes los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, del 16 de abril de 2019, emitidos por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED/C/7); particularmente respecto de lo indicado en el numeral 1 del Principio 5. “La búsqueda debe respetar el derecho a la participación”, en el que se establece:

**“[...] Las víctimas, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellas y ellos, así como toda persona, asociación u organización con un interés legítimo tienen el derecho de participar en la búsqueda. Este derecho debe estar protegido y garantizado en todas las etapas del proceso de búsqueda, sin perjuicio de las medidas adoptadas para preservar la integridad y efectividad de la investigación penal o de la búsqueda misma. Las personas mencionadas**

deben tener acceso a la información sobre las acciones realizadas, así como sobre los avances y los resultados de la búsqueda y de la investigación [...].” -Resaltado y subrayado no es del original-.<sup>5</sup>

Además, el proyecto también desconoce el Principio 4.1 del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, que agrega la mirada multidisciplinaria aportada por las experiencias y conocimientos especiales de los defensores de derechos humanos que beneficia a las víctimas indirectas de personas desaparecidas forzosamente, como ocurre en el caso de las mamás quejas.

**PRINCIPIO 4. La búsqueda debe tener un enfoque diferencial**

1. La búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad requiere procedimientos, experiencias y conocimientos especiales que satisfagan sus necesidades particulares. El enfoque diferencial también debe ser tenido en cuenta en la atención a quienes participan en la búsqueda, como familiares y otras personas allegadas a la persona desaparecida. Igualmente, debe ser tenido en cuenta en los procedimientos de identificación y entrega de las personas encontradas.

j) El proyecto de resolución en ese marco, pone en grave riesgo los compromisos del Estado Mexicano frente a las víctimas sujetas a condiciones especiales de vulnerabilidad, por lo que el mismo debe desestimarse en base a lo argumentado en este apartado.

**5. El derecho a defender los derechos humanos.**

a) Conforme al artículo 1º de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos -Declaración de Personas Defensoras de Derechos Humanos- (A/RES/53/144), se establece como principio general que:

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” - Resaltado y subrayado no es del original-.

b) En ese marco, el proyecto de resolución en comento limita el derecho “individual y colectivo” en procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional, el cual, en el caso que se somete a juicio está referido al derecho de las “víctimas”, cabe resaltar, que en ese marco, no solamente se limitan los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, sino a la vez el derecho de las víctimas a una defensa efectiva que trasciende el derecho a contar con una asesoría jurídica de carácter técnico o profesional.

---

<sup>5</sup> Comité contra la Desaparición Forzada, «Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas» (2019), [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1\\_Global/CED\\_C\\_7\\_28387\\_S.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Global/CED_C_7_28387_S.pdf).



c) Cabe resaltar en ese sentido que, conforme a la literal c), numeral 3 del artículo 9 de la Declaración de Personas Defensoras de Derechos Humanos, se dispone que “en el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos” tiene, entre otros, el derecho a:

**“Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes** para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.” -Resaltado y subrayado no es del original-.

d) En ese sentido, es importante que se considere la obligación que impone a los Estados el numeral 2 del artículo 2 de la Declaración referida, en la que se dispone:

**“Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias** para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén efectivamente garantizados.” -Resaltado y subrayado no es del original-.

e) Con relación a los derechos de las víctimas, es importante resaltar que en el apartado C, fracción I, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se esbalece con claridad, entre los derechos, otorgados el de “[...] **Recibir asesoría jurídica**; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal [...]” -Resaltado y subrayado no es del original-, **que no es lo mismo a recibir asesoría por una persona profesional del derecho** -abogada o abogado-, por lo que, en ese sentido la resolución en comento, claramente restringe el derecho de las víctimas a una asesoría jurídica “integral”, al limitar la asistencia que les brinden las personas defensoras de derechos humanos, individual o colectivamente, pues la norma constitucional no es restrictiva al respecto. Conforme a los alcances del artículo 20 constitucional **el derecho a "Recibir asesoría jurídica" no se limita a la asistencia judicial, lo cual sería un criterio reduccionista del alcance literal y semántico de la norma constitucional**, sino a la vez, de los principios y jurisprudencia derivada del derecho convencional.

f) No obstante la previsión normativa en comento, la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, preve en el punto 4, que:

“Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. **Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia** y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.”

g) En materia judicial se dispone en la Declaración en comento, en la literal c) del punto 6 que deberá facilitarse “[...] la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas [...]”, entre los que se encuentran, la prestación de “[...] asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial”.

h) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en desarrollo de lo previsto en el artículo 8 de la Convención ha afirmado en reiterados fallos que las víctimas:

**“[...] deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación.”** -Resaltado y subrayado no es del original-<sup>6</sup>.

i) Específicamente, en torno a la reserva de actuaciones ha sostenido que: “[...] “en ningún caso la reserva puede invocarse para impedir a la víctima el acceso al expediente de una causa penal. La potestad del Estado de evitar la difusión del contenido del proceso, de ser el caso, **debe**

---

<sup>6</sup> Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, § 227, Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, § 59, Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, § 186, Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, § 63, Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, § 146, Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, § 296, Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, § 116, Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, § 192, Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, § 176, Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, § 139, Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, § 192, Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, § 187, Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 226, § 86, Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 229, § 113, Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, § 120, Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, § 107, Corte IDH. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, § 178, Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240, § 207, Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, § 199, Corte IDH. Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C No. 256, § 167, Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260, § 217, Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268,, § 181, Corte IDH. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, § 144.

**ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el ejercicio de los derechos procesales de las víctimas**” -Resaltado y subrayado no es del original-<sup>7</sup>.

j) Relevante resulta la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en torno al acceso a la justicia de las víctimas, en la que afirma que si bien el derecho al acceso a la justicia es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado”, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones “deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho”<sup>8</sup>.

k) De esa cuenta, lo previsto en el la fracción I, del apartado C, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos es compatible con los principios y jurisprudencia internacional que es vinculante para México, fundamentalmente a partir de lo previsto en el artículo 1 del texto Constitucional. En ese sentido, es relevante el criterio jurisprudencial fijado por el Pleno en torno al carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, respecto de la cual ha sostenido:

**“Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.”**<sup>9</sup> -Resaltado y subrayado no es del original.

---

<sup>7</sup> Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240, § 253, Corte IDH. Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C No. 256, § 168.

<sup>8</sup> Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, § 54, Corte IDH. Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, § 193.

<sup>9</sup> «JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.», Tesis: 2006225. P./J. 21/2014 (10a.). Pleno. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Pág. 204., accedido 12 de agosto de 2019, <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2006/2006225.pdf>.

l) Derivado de lo expuesto, el Estado mexicano al “[...] impedirles acceder directamente a los registros de las carpetas de investigación [...]”; y, considerar que ello “[...] no merma, en forma alguna, las labores que llevan a cabo [...]” las personas defensoras de derechos humanos, designadas por las víctimas, **implica una clara inobservancia a los compromisos internacionales asumidos por México; y, una clara violación al ejercicio de los derechos de las víctimas**, derivadas de lo previsto en los artículos 1, 5 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **pues estaría limitando en perjuicio de las víctimas** los alcances del texto contitucional, respecto de los derechos y garantías de éstas, así como, el derecho de toda persona a “[...] a promover y **procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional** e internacional”, de forma individual y colectiva, según lo previsto por la Declaración de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Garantía esta que es congruente con el derecho convencional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha sido indicado el desarrollo del presente escrito.

**Por lo antes expuesto**, a ustedes Ministras y Ministros de la Primera Sala, atentamente solicitamos:

**PRIMERO:** Se tenga por presentado el presente escrito en calidad de Amicus Curiae y sea tomado en consideración por esta Sala en el momento de resolver.

**SEGUNDO:** Se desestime el proyecto presentado por el Ministro Luis María Aguilar Morales; y,

**TERCERO:** Se turne nuevamente el caso y se resuelva tomando en consideración lo alegado en el amparo y lo presentado en este amicus.

#### **Organizaciones Firmantes**

Alberto Solís Castro

Director de Servicios y Asesoría para la Paz SERAPAZ

Ana Cristina Ruelas Serna

Directora de Article 19 Oficina México y Centroamérica

Fernando Ríos Martínez Secretario Ejecutivo Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT)

Ayesha Elizabeth Borja Domínguez

Secretaria Técnica de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables

Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación

**Organizaciones adherentes**

Asociación Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Salvador, COFAMIDE

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras, COFAMIPRO

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras, COFAMICENH

Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, AFAMIDEG